El Longino
Soy del Norte
Fecha: 15/07/2025 Audiencia: 10.800 Sección: LOCAL
Vpe: $388.909 Tirada: 3.600 Frecuencia: 0
Vpe pág: $515.658 Difusión: 3.600
Vpe portada: $515.658 Ocupación: 75,42%

Municipios frente al delito: Informe revela profundas brechas en las estrategias de seguridad comunal en Chile

Mientras el Congreso debate un proyecto de ley para fortalecer el rol de las municipalidades en seguridad pública, un nuevo informe radiografió en detalle cómo las comunas chilenas enfrentan uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía: la delincuencia. El estudio, elaborado por los académicos Claudio Fuentes y Pedro Valenzuela y publicado por la Fundación Friedrich Ebert junto al Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP, sistematiza por segundo año consecutivo las medidas implementadas por los gobiernos locales en esta materia. En su edición 2025, logró una cobertura inédita, con respuestas de 314 comunas (el 91% del país). Los hallazgos muestran que, aunque los municipios han intensificado sus acciones para combatir la delincuencia, persisten profundas desigualdades territoriales en recursos, capacidad de gestión y acceso a tecnologías clave.

A diferencia del gobierno central –que actúa a través del Ministerio del Interior y las policías– los municipios no tienen atribuciones exclusivas en seguridad. Sin embargo, tanto la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades como la reciente creación del Ministerio de Seguridad Pública han ampliado sus facultades y espacios de colaboración en esta área. La ley permite a los gobiernos locales adoptar medidas de prevención social .

El informe analizó 30 iniciativas distintas en el ámbito de la seguridad, que van desde la contratación de patrulleros e instalación de cámaras de vigilancia hasta programas sociales como Senda Previene y Lazos. En promedio, los municipios han implementado 14 de estas 30 medidas, pero las diferencias entre comunas son significativas. Algunas destacan con despliegues muy superiores al promedio: por ejemplo, La Serena y Las Condes reportan 26 acciones cada una, situándose a la cabeza del ranking nacional. Otras comunas apenas superan la decena de iniciativas. Lo Barnechea, Padre Hurtado, Providencia, Colina y La Pintana también figuran entre las más activas, con 20 o más medidas en curso. Del total de 46 comunas que declararon haber implementado 20 o más medidas de seguridad, más de la mitad se concentra en la Región Metropolitana, evidencia de la alta concentración de recursos e iniciativas en la zona central del país.

Pese al aumento sostenido de esfuerzos contra la delincuencia en el nivel local, muchas comunas carecen aún de una estructura básica para coordinar dichas acciones. Según el informe, solo 69% de los municipios ha creado una Dirección de Seguridad Pública, lo que implica que casi un tercio (31%) sigue operando sin una institucionalidad formal dedicada a la seguridad. Esta carencia impacta especialmente a comunas pequeñas o con menos recursos, que dependen del ingenio y la voluntad política más que de equipos profesionales especializados. “La seguridad municipal se ha convertido en un tema muy demandado por la ciudadanía, que percibe que los municipios tienen un rol importante en la seguridad”, explica experto en administración en seguridad pública. Desde hace unos tres años se estableció oficialmente esta función en los municipios, generando mayores expectativas locales. El desafío, añade el académico, es que esas demandas de la comunidad muchas veces superan las capacidades reales de gestión y financiamiento que tienen los gobiernos comunales.

Vehículos, cámaras y patrullas: la punta del iceberg

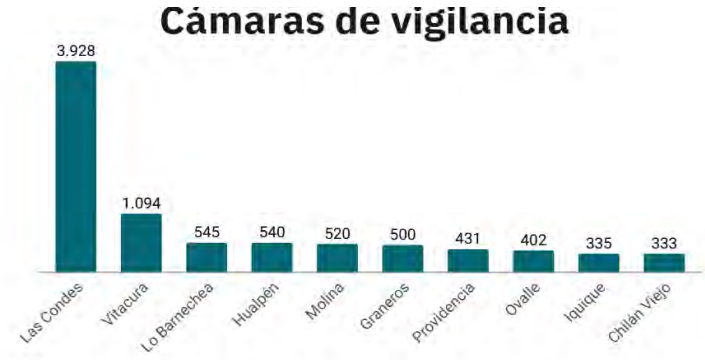
En cuanto a las acciones más frecuentes, prácticamente todas las comunas dicen haber implementado medidas básicas de vigilancia: casi 96% dispone de vehículos de seguridad (camionetas o autos municipales destinados a patrullaje), y 91% cuenta con inspectores, guardias o patrulleros locales desplegados en las calles. Asimismo, 83% de los municipios reporta el uso de cámaras de televigilancia para monitorear espacios públicos. Otras iniciativas comunes incluyen la recuperación de espacios públicos (86% de las comunas) y la instalación de centrales de monitoreo o teléfonos comunitarios de emergencia. En la práctica, prácticamente no hay municipio mediano o grande que no haya invertido en al menos un vehículo rotulado de “Seguridad Ciudadana” o un sistema básico de cámaras, visibilizando su esfuerzo por disuadir el delito a nivel local.

Sin embargo, la proliferación de tecnología no siempre se traduce en efectividad. Fuentes advierte que muchas cámaras adquiridas por los municipios “no están interconectadas entre sí ni con sistemas regionales o policiales, lo que debilita su efectividad”. Es decir, operan como sistemas cerrados que no necesariamente permiten una respuesta coordinada con Carabineros u otras comunas. Además, hasta ahora no existe una evaluación clara del impacto real de estos dispositivos. “Los municipios compran cámaras, las instalan, pero la pregunta es: ¿son eficientes para el combate del delito?” plantea el investigador, subrayando la necesidad de medir resultados más allá de la percepción inicial de mayor vigilancia.

Las brechas tecnológicas entre comunas también se hacen evidentes. “Hay una brecha muy significativa entre municipios que tienen recursos para hacerlo y otros que no, porque el costo de este tipo de esfuerzos es muy alto” advierte Fuentes. Equipamientos modernos como drones de patrullaje, analítica de imágenes con inteligencia artificial o sistemas integrados de alarma aún son excepciones: menos del 10% de los municipios reporta usarlos. Incluso una herramienta ya más extendida en el extranjero, los pórticos lectores de patentes para detectar vehículos robados, recién comienza a implementarse en Chile de forma limitada. Las Condes encabeza con 54 pórticos instalados, seguida por San Joaquín (37) e Iquique (36). Si bien el uso de estos dispositivos aún no es masivo, el informe advierte que estas y otras tecnologías de punta serán claves para enfrentar a una delincuencia cada vez más móvil y sofisticada. No obstante, su alto costo plantea importantes desafíos para las comunas más pequeñas o de menores ingresos, que difícilmente pueden financiar por sí solas estas inversiones.

Recursos versus gestión: ¿más presupuesto, más seguridad?

Otro aspecto relevante que aborda el estudio es la relación entre el presupuesto municipal destinado a seguridad y la cantidad de iniciativas que se llevan a cabo. En general, las comunas que más gastan tienden a ejecutar más acciones, aunque no siempre es así. Un ejemplo llamativo es Maipú (Región Metropolitana): es la comuna que proyectó el mayor gasto en seguridad para 2024 –más de $96 mil millones de pesos–, pero no encabeza el ranking de medidas implementadas. Por el contrario, Padre Hurtado, con un presupuesto bastante inferior, logró posicionarse entre las comunas más activas en iniciativas de seguridad. Esto sugiere que si bien “mientras más recursos, más posibilidades tienes de desarrollar iniciativas”, la voluntad política y la gestión



FUENTE: Segundo informe de iniciativas de seguridad municipal, Instituto de investigación en Ciencias Sociales UDP.

FUENTE: Segundo informe de iniciativas de seguridad municipal, Instituto de investigación en Ciencias Sociales UDP.

El Longino
Soy del Norte
Fecha: 15/07/2025 Audiencia: 10.800 Sección: LOCAL
Vpe: $376.482 Tirada: 3.600 Frecuencia: 0
Vpe pág: $515.658 Difusión: 3.600
Vpe portada: $515.658 Ocupación: 73,01%

eficiente pueden marcar la diferencia incluso con fondos acotados. Hay medidas de bajo costo –como organizar a los vecinos o mejorar la iluminación barrial– que dependen más de la iniciativa municipal que de grandes inversiones, y pueden tener alto impacto local.

Paradójicamente, no siempre las comunas que enfrentan mayores índices delictuales despliegan más acciones de seguridad. Los datos del informe no muestran una correlación directa entre la tasa de delitos violentos de una comuna y la cantidad de iniciativas que ésta implementa. De hecho, comunas relativamente seguras o de alto ingreso –como Las Condes o Lo Barnechea, que registran tasas de delitos violentos bajas– están entre las que más invierten en seguridad municipal. En cambio, otras zonas con índices delictuales elevados no exhiben un despliegue equivalente de medidas. Esto podría explicarse, sugiere Fuentes, porque la delincuencia tiende a desplazarse geográficamente: cuando un sector se refuerza con más vigilancia, los delitos simplemente migran hacia comunas vecinas con menos recursos. Por ello, concentrar esfuerzos en ciertos puntos puede reducir la delincuencia localmente, pero a nivel macro no garantiza una baja sostenida en los delitos, si estas acciones no vienen acompañadas de una coordinación territorial más amplia.

Inseguridad y respuesta local en Iquique

En el extremo norte del país, la ciudad de Iquique ejemplifica tanto los avances como los desafíos de la seguridad municipal fuera de la capital. Pese a contar con herramientas tecnológicas de punta –como 36 pórticos lectores de patentes, uno de los números más altos a nivel nacional–, las comunidades locales siguen enfrentando una cruda realidad de delitos que alimenta la sensación de inseguridad. Vecinos de sectores residenciales han alzado la voz en reiteradas ocasiones denunciando la ola de robos y asaltos en sus barrios y lo que perciben como un "olvido" de las autoridades centrales.

En el sector sur de Iquique, por ejemplo, dirigentes vecinales contabilizaron 261 delitos ocurridos entre el 1 de enero y el 18 de febrero de 2024 bajo jurisdicción de la Cuarta Comisaría Cavancha, según datos del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros. Los ilícitos más frecuentes incluían robos con fuerza, robos violentos de vehículos, robos con intimidación y agresiones, entre otros. "Ha habido varios robos, el último a una persona le robaron el celular y no pudimos hacer nada. En nuestra población hay ancianos, niños y ahora que se acerca el tiempo escolar, tenemos miedo de lo que pueda ocurrir", relata Mario González, presidente de la Junta de Vecinos Cerro Colorado, en la zona sur de Iquique. El dirigente añade que la respuesta policial suele llegar "cuando es algo grave" y que en el día a día los residentes se sienten desprotegidos: "Realmente estamos solos y si no es por un WhatsApp con los vecinos, nadie nos apoya... La verdad es que ya no creemos nada" concluye, expresando la frustración de su comunidad. Estos testimonios reflejan el desamparo que perciben muchos iquiqueños ante el auge de la delincuencia y la lentitud de las respuestas tradicionales.

Autoridades de Iquique presentando el nuevo programa de patrullaje preventivo y la línea de emergencias 1520, en un acto realizado a inicios de abril de 2025. En respuesta a esta creciente preocupación ciudadana, la Municipalidad de Iquique ha reforzado sus esfuerzos preventivos en coordinación con la comunidad. A comienzos de abril lanzó un Programa de Patrullaje Preventivo, financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el objetivo de disminuir la sensación de inseguridad mediante rondas de vigilancia planificadas junto a los vecinos. "Esta es una medida disuasiva y preventiva, que es lo que nos permite la Ley", explicó el alcalde Mauricio Soria al presentar la iniciativa, detallando que el patrullaje contará con cinco camionetas nuevas, cada una tripulada por un conductor profesional y un trabajador social, que recorrerán distintos sectores de la comuna en coordinación con inspectores municipales, Carabineros y otras entidades. El servicio operará de lunes a viernes entre 8:00 y 20:00 horas, cubriendo puntos estratégicos de la ciudad y caletas del borde costero, registrando denuncias, necesidades y riesgos para derivarlos oportunamente a las áreas municipales correspondientes. A esta labor se suma la implementación del número telefónico abreviado 1520, una línea de emergencia de acceso rápido (desde celular o red fija) que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los llamados al 1520 son atendidos por operadores del Centro de Alerta Municipal, quienes dan respuesta inmediata o derivan los casos a los departamentos municipales o servicios competentes según la naturaleza de la emergencia. En otras palabras, el municipio busca con estas medidas ponerse en primera línea de respuesta ante problemas de seguridad local, complementando la labor policial tradicional.

El panorama trazado por el informe 2025 deja en evidencia una profunda desigualdad territorial en materia de seguridad municipal. Mientras algunas comunas cuentan con decenas de medidas en marcha y equipamiento de última generación, otras apenas logran implementar lo básico. Esta brecha no solo obedece a diferencias presupuestarias, sino también a las capacidades administrativas y técnicas instaladas en los territorios. Comunas con equipos profesionales consolidados y experiencia en proyectos pueden desarrollar más iniciativas, gestionar fondos y evaluar resultados, a diferencia de municipios pequeños que tal vez no tienen personal especializado en seguridad o carecen de unidades dedicadas. La situación plantea un reto para las políticas públicas: ¿cómo asegurarse de que el estándar de seguridad local no dependa del código postal, sino que exista un piso mínimo garantizado para todos los ciudadanos, vivan donde vivan?

Los autores del estudio advierten que cualquier ley o política nacional que busque fortalecer la seguridad municipal debe considerar estas asimetrías. De lo contrario, nuevas exigencias o responsabilidades podrían terminar ahondando aún más la brecha entre comunas ricas y pobres. La discusión legislativa en curso ofrece la oportunidad de dotar de más herramientas y facultades a los gobiernos locales, pero también de nivelar el apoyo financiero y técnico que reciben. Una alternativa sugerida es establecer mecanismos diferenciados de financiamiento para seguridad municipal, de modo que comunas vulnerables puedan acceder a fondos especiales o asesorías que les permitan ponerse al día. Igualmente importante será fomentar la coordinación intermunicipal y con el gobierno central, para evitar duplicidades y asegurar que la información y buenas prácticas fluyan entre territorios.

El contexto político agrega urgencia a estos temas. Chile se encamina a nuevos procesos electorales y la inseguridad ciudadana se ha posicionado como eje central del debate público. En el escenario electoral que se avecina, "un tema central para las próximas elecciones presidenciales va a ser cómo logras articular la gestión del gobierno central con los gobiernos locales", destacó el experto en seguridad pública. Esto implica que las propuestas de los candidatos deberán abordar no solo el fortalecimiento de Carabineros o las leyes penales, sino también el rol de las municipalidades en la prevención del delito y la recuperación de los barrios. La ciudadanía, por su parte, observa con atención cómo sus alcaldes responden al flagelo de la delincuencia en lo cotidiano, más allá de las promesas nacionales. Al final, como señalan los expertos, la pregunta de fondo que deja este informe es si estamos logrando construir un esquema de seguridad verdaderamente colaborativo. "La presión está puesta en cómo se gestiona la seguridad desde lo local. Y este reporte demuestra que los municipios sí están haciendo cosas. La pregunta es si están articulados entre ellos, si dialogan, si se coordinan", reflexiona Fuentes. En esa articulación efectiva entre Estado central y municipios –y entre los propios municipios– podría residir la clave para brindar seguridad de manera equitativa y sostenible a lo largo de todo Chile.